

ron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Sebastian Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*L. Guzman.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Mayo veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Inc. Agustín Peralta*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa seguida en el Juzgado de Distrito de Guanajuato, contra Félix Ramírez y socios por robo de parte del archivo del Tribunal de Circuito de Celaya.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el cuerpo de delito del robo de una parte del archivo del Tribunal de Circuito, que residía en Celaya, está justificado plenamente por la confesion de los acusados, la existencia de los expedientes robados y la fé que el Juzgado tiene dada de ellos en el lugar correspondiente.

De la causa, aparecen dos reos como perpetradores principales del robo, y dos como receptadores.

Félix Ramírez, á quien debe considerarse como autor principal, iniciador y perpetrador del delito, ha confesado, que en su calidad de doméstico de la casa del Magistrado suplente de Circuito, tuvo ocasion, no de concebir el robo, sino la oportunidad de realizarlo; á este efecto ha pretendido, que la idea de verificar la extraccion de los papeles, le fué sugerida por su cómplice Jesus Gazca. Entre la afirmacion del uno

y la negativa del otro, difícil debe ser á la justicia decidir, si Ramirez fué instigado por Gazca, ó aquel solo fué quien concibió el delito.

No parece fuera del caso fijar la atencion, en que Ramirez, al dividir con Gazca la utilidad que debía producirle y le produjo el papel robado, tiene que haberlo hecho impulsado por algun motivo que lo obligara á aquello; de otra manera, era prudente creer que Ramirez se hubiera aprovechado solo del precio del papel, y bascando con quien dividirlo, á la vez que su utilidad fuera menor se hacia sin causa alguna, de un testigo de su delito. La causa de este modo de obrar, es probable que no sea otra, sino la instigacion ó el consejo que Ramirez recibió de Gazca, circunstancia que necesariamente los hizo cómplices y puso al uno en la necesidad de dividir el robo con el otro.

Jesus Gazca no ha confesado que sea él quien aconsejara y diera la idea á Ramirez de perpetrar el robo; sin embargo, ya esta promotoria fiscal ha manifestado las razones en que se funda para presumir este hecho fundado y dario por cierto.

Uno y otro de los acusados están conformes en haberse hecho de los papeles robados, en que los fueron á vender á las tiendas de Serna y de Solórzano, y en que se aprovecharon del precio que les dieron por ellos.

Donaciano Tovar y Francisco Serna, que figuran como receptadores, tienen en su contra la presuncion de que compraron el papel en la inteligencia de que era útil, procedente de una oficina, y por consecuencia debieron inferir que era robado. Se funda esta presuncion en el hecho, como consta de autos, de que los papeles iban formando expedientes cosidos, y liados éstos en bultos con el cuidado que no es costumbre hacerlo con los papeles inservibles, que se destinan á una venta tan baja como la que se hace por peso.

Respecto de Tovar, existe tambien la acusacion que Ramirez le hace, de haber sabido por él mismo que el papel se lo habia extraido de la casa de su amo. No por esto se deba entender, que este ministerio fiscal vá á fundar su acusacion en el dicho de este testigo, supuesto que á la singularidad reune la nulidad marcada en la ley 21, título 16, partida 3ª. Sin embargo, sí creo que este dicho robustece hasta cierto punto la presuncion fundada en los hechos de que se ha hecho mérito.

Tambien parece fundado el cargo que se le hace á Serna, por no haber investigado el origen de los papeles que compró, toda vez que encontró unidas en los expedientes, algunas monedas de cobre. No es comun que los papeles inútiles, se desechen sin haberse registrado por su dueño y cerciorándose antes de que no contenian cosa servible, ó por lo menos distinta de aquello de que vá á deshacerse. Por otra parte, aun cuando el procesado como asegura, no supiese leer, al ver esas monedas unidas á los expedientes, ningun esfuerzo necesitaba haber hecho para comprender que se trataba en ellos de procesos seguidos á monederos falsos, y por consecuencia inferir su procedencia y que no podian menos de pertenecer á una oficina pública.

De lo dicho, el Promotor que suscribe infiere que la culpabilidad de Félix Ramirez, está justificada lo mismo que la de Jesus Gazea, en el primero, como autor principal y ejecutor del robo, y en el segundo, como cómplice é instigador del delito. No sucede lo mismo por lo que toca á Donaciano Tovar y Francisco Serna; verdad es que como se ha dicho, no faltan presunciones que en cierta manera condenen á los acusados, haciéndolos aparecer como voluntarios encubridores; pero por otra parte, hay consideraciones que no pueden menos de tenerse en cuenta, para deducir el grado de culpabilidad. ¿Cuáles, por ejemplo, pudieran ser las utilidades que reportaban á éstos, de comprar intencionalmen-

te el papel robado, siendo así que lo compraron al precio corriente y no en menos? Ajenos estos individuos, como se debe suponer por su ejercicio, á los negocios de oficina, nada extraño es que ignoraran si era posible ó no que una oficina se deshiciese de ellos y por inservibles los mandara vender.

En este supuesto, y en el de que la culpabilidad de los que figuran como receptadores no está justificada, este ministerio fiscal creo que no puede castigarse en estos individuos, sino la culpa lata, por la cual atento el perjuicio que de su omision se originó, debe condenárseles á una pena correccional únicamente.

La ley de 5 de Enero de 1857, en su art. 51, toma por base en el delito de hurto para la imposicion de la pena, el valor de la cosa robada: difícil sin embargo es en este caso, justipreciar los objetos, porque ni pueden considerarse en su valor intrínseco que es ninguno, ni puede tampoco hacérseles á los reos el cargo por su importancia moral que tienen, porque ni su educacion, ni su miserable estado de jornaleros, ni su escasa capacidad natural, pudo permitirles el darle á su delito la importancia que tendria ejecutado por personas en otras condiciones.

El delito, atentas las razones dichas, debe considerarse cuando mas, comprendido en la fraccion 1ª del artículo 51 citado arriba; sin que sea motivo para gravar la pena, las circunstancias contenidas en las fracciones 1ª y 3ª del art. 53; es decir, que los objetos robados pertenezcan al Gobierno y que el robo se efectuara en una oficina, pues ni una ni otra cosa está probado que les constara á los perpetradores del delito. Por tales razones, este ministerio fiscal pide al Juzgado, que con fundamento del art. 1º, fraccion 1ª, de la ley de 5 de ~~Febrero~~ ya citada, se sirva imponerles, á Ramirez, la pena de un año de prision, á Jesus Gazea la de ocho meses y dé por compurgado con el tiempo sufrido

1 Enero

de prision á Donaciano Tovar y Francisco Serna, en la inteligencia de que este castigo parece ya excesivo, para el grado de culpabilidad con que aparecen los últimos; todo lo cual procede de justicia.

Guanajuato, Diciembre quince de mil ochocientos setenta. (Firmado).—Zenon J. Velasco.

Sentencia del Juez de Distrito.

Guanajuato, veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta.

Vista la presente causa instruida por robo de causas y expedientes del archivo del Tribunal de Circuito de Celaya, contra Félix Ramirez de veinte años, soltero, arriero y doméstico, contra Jesus Gazca de la misma edad y estado, contra Donaciano Tovar de treinta años, casado y comerciante, y contra Francisco Serna de veinte años, soltero y de la misma profesion que el anterior, siendo todos ellos vecinos de Celaya. Vistas así mismo las preparatorias de los procesados, las declaraciones de los testigos, las diligencias de confesion con cargos, lo alegado por los respectivos defensores, la citacion para sentencia y todo lo demás que se tuvo presente y ver convino; y Considerando: que el cuerpo del delito está justificado debidamente con las declaraciones de los testigos Juan de Mata Reynoso, Ramon Garcia y José de la Torre, que acreditan la preexistencia y falta posterior de los objetos robados, y ademas con la fé judicial y reconocimiento que los testigos hicieron de los papeles sustraídos, que fueron encontrados en la tienda de D. Francisco Serna y de D. Mariano Solórzano: Considerando: que la delincuencia de Félix Ramirez de la misma manera que la de Jesus Gazca, está plenamente comprobada con la confesion de ambos reos administrada con la existencia del delito y con el dicho de los que compraron la materia del robo:

Considerando: que el citado Ramirez ha sido el principal autor del delito, supuesto que él extrajo los papeles de la casa de su amo, y por sí mismo sin acompañarse de persona alguna vendió en la tienda de Solórzano un legajo de expedientes civiles, aprovechándose solo él del producto de esa venta. Considerando: que no debe imputarse á los reos la circunstancia de ser una oficina pública el lugar donde se cometió el robo porque no consta que hayan tenido pleno conocimiento de ella, y que no sabiendo leer ni escribir, ni pudiendo por lo mismo saber que lo que constituyó el robo era perteneciente al archivo de un Tribunal, no se les debe hacer el cargo de robo de causas y expedientes, sino del de simple papel inútil que no tenía para ellos mas valor que el que les dieron al venderlo. Considerando: que en este concepto, debe reputarse el robo de que se trata comprendido en el artículo 52 de la ley de 5 de Enero de 1857, con la circunstancia agravante que determina la fraccion 4ª del art. 53 de la misma ley. Considerando: que respecto de los otros dos procesados Donaciano Tovar y Francisco Serna, no aparece prueba plena de su culpabilidad, puesto que contra cada uno de ellos no resulta mas dato que el dicho de un solo testigo, el cual en ningun caso basta para condenar al acusado; por estas consideraciones y con fundamento de la citada ley y de las 26 tit. 1ª. part. 7ª. y 12 tit. 14 part. 3ª, el C. Juez que suscribe, definitivamente fallando declara:

Primero: Que se condena al reo Félix Ramirez á la pena de un año de prision, contado desde la fecha en que se le motive la que está sufriendo.

Segundo: Que se condena á Jesus Gazca á la pena de ocho meses del mismo padecimiento, contados así mismo desde que se declaró bien preso.

Tercero: Que se absuelve del cargo á los procesados Donaciano Tovar y Francis-

co Serna, quienes serán desde luego puestos en libertad bajo de fianza.

Notifíquese este fallo á las partes en la forma que corresponde, cíteselos para la remision de la causa á la superioridad en grado de remision, y sáquese testimonio de las diligencias concernientes al robo de papeles de la propiedad particular del C. Lic. Juan de Mata Reynoso, acaecido en la casa habitacion de dicho ciudadano, á fin de remitirlo al Juzgado popular en turno, de Celaya, para que en uso de sus atribuciones se sirva proceder como sea de justicia contra los que resulten culpables.

Así el nominado Juez de Distrito lo decretó y firmó: doy fé. (Firmado.) Albino Torres.—Luis G. Medina.

Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Magistrado de Circuito.

El Promotor Fiscal dice: que la causa presente ha sido instruida en contra de Félix Ramirez, Jesus Gazca, Donaciano Tovar y Francisco Serna, por la extraccion de varias causas y expedientes del archivo de este Tribunal, cuya falta fué notada en el dia nueve de Agosto del año próximo pasado.

El autor principal del delito fué Félix Ramirez, doméstico de la casa del C. Magistrado de Circuito Lic. Juan de M. Reynoso, en cuya casa se encontraba el Tribunal cuando estaba radicado en la Ciudad de Celaya.

Comprobado como se halla el cuerpo del delito por la existencia anterior y desaparicion posterior de los expedientes robados, así como la culpabilidad de Ramirez por la propia confesion; prueba segun la ley 2. tit. 13. part. 3ª que dice:

“Grande es la fuerza que ha la conocencia que hace la parte en juicio, estando su contendor delante. Casi por ella se puede

librar la contienda, bien así como si lo que conocen fuese probado por buenos testigos ó por verdaderas cartas. El por ende el Judgador, ante quien es hecha la conocencia, debe dar luego juicio afinado por ella; si sobre quella que conocieron, fué comenzado pleyto ante; por demanda, ó por respuesta. Eso mismo dezimos, si la conocencia fuesse hecha en juicio, en pleyto criminal, en cual manera quier.”

La ley 12. del tit. 14. de la misma partida, al clasificar las pruebas, se expresa así. “Criminal pleyto que sea movido contra alguno en manera de acusacion ó de riepto, debe ser provado abiertamente por testigos, ó por cartas ó por conocencia del acusado, ó non por sospechas tan solamente.” Y despues agrega:

“Ca dorecha cosa es, que el pleyto que es movido contra la persona del ome, ó contra su fama, que sea provado ó averiguado por pruebas claras como la luz, en que non venga ninguna dubda.” Así es, que la confesion es enumerada entre esas pruebas que son tan claras como la luz, y legalmente no puede el Juez desecharla.

Esta razon de indeclinable necesidad, obligó sin duda al C. Juez de Distrito de Guanajuato á condenar al referido Felix Ramirez á la pena de un año de prision.

Jesus Gazca está confeso de haber vendido los papeles en union de Ramirez, y dividiéndose con él la utilidad. Aquí hay, que deducir un hecho de inferencia necesario, y es que Gazca fué receptador del hurto hecho por Ramirez, pues sabia que los papeles eran hurtados, y que se aprovechó de la utilidad, á medias con éste, que produjeron. La ley general de 5 de Enero de 1857, en su art. 3º. dice: “Se tendrán como encubridores ó receptadores, para los efectos de la responsabilidad criminal, los que con conocimiento del delito, pero sin haber tenido participio en él como autores, ni como cómplices, hayan intervenido despues de verificado: 1º Aprovechándose por sí mismos de los efectos del delito. 2º Ayu-

dando á los delincuentes en el mismo sentido. 3º. Haciendo con ellos cualesquiera especie de contrato relativo á los efectos del delito.”

Ha habido presunciones vehementes en contra de los procesados Donaciano Tovar y Francisco Serna, mas insuficientes para condenarlos. Existe contra ellos el dicho de un testigo que solo forma presuncion segun la ley 32. tit: 16. part. 3ª.

En vista de estas consideraciones, el Fiscal pide: que por sus propios legales fundamentos, se confirme la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Guanajuato, en veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta.

Querétaro, Enero diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Querétaro, Febrero seis de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: el C. Lic. Juan de M. Reynoso tenia en su poder cuando funcionaba de Magistrado suplente de este Tribunal, el archivo del mismo que debia remitir de Celaya á esta ciudad, para cuyo efecto formó inventario de causas y expedientes que quiso ratificar, cotejando el primero con las piezas relativas, en cuyo acto notó le faltaban distintos legajos civiles y criminales de que se hace mérito á fojas 3 vuelta y 4 frente, con cuyo motivo procedió á inquirir el autor ó autores de la sustraccion de los documentos, procediendo á la aprehension de su criado, Félix Ramírez, quien le confesó que en union de Jesus Gazca habian vendido los papeles que se extraviaron de la casa de Reynoso.

Practicada la averiguacion judicial, resultó que tanto Ramirez como Gazca, ambos solteros, de veinte años, domésticos y vecinos de Celaya, habian cometido el deli-

to de robo, siendo directa la criminalidad del primero, y por complicidad la del segundo, cuyos reos declararon haber vendido el papel á Francisco Serna, casado, de treinta años, y á Donaciano Tovar, soltero, de veinte años, ambos comerciantes y vecinos de Celaya, cuyos individuos compraron el papel, que en parte fué encontrado en su poder por los CC. Ramon García y José de la Torre.

El delito de que se ha hecho mérito en lo concerniente al participio que hayan tenido los reos, se halla demostrado plena y legalmente con respecto á Ramirez, por su propia confesion de haber extraido los legajos del estante en que se hallaban, cuya confesion unida á la existencia del cuerpo del delito, y á la justificacion de preexistencia y propiedad de la cosa robada, lo constituyó además convicto en el delito de que se le hizo cargo, teniendo en su contra las circunstancias agravantes de abuso de confianza que fija el artículo 52 de la ley de 5 de Enero de 1857; ser las cosas, objeto del robo, pertenecientes á una oficina pública del Gobierno, segun lo prefiija el artículo 49 de la misma ley, existiendo solo en favor del reo, no haber cometido el delito con violencia en la cosa ni al efecto se portasen armas, segun refiere el artículo 48 de la ley ya citada; pues aunque el reo se ha excepcionado con la ignorancia que tuviera de que fuesen los papeles de Tribunal ó oficina pública, esa excepcion no lo justifica ni es factible, tanto por el convencimiento que en sí lleva inhibida la existencia de una oficina, como por la clase de documentos, personas y dependientes de la misma, con lo que se descubre la existencia de un despacho público.

La criminalidad de Jesus Gazca en un grado secundario, segun se ha dicho, tambien se halla demostrada por haber cooperado á la ejecucion del hecho, segun lo ascuró Ramirez, con los consejos y excitativas que sobre el particular aquel le diera; con haberse aprovechado de la utilidad que

resultó del delito; con el hecho de haber percibido dinero de los papeles, los que ocultó según ha confesado; con el dolo consiguiente, ó sabiendo la procedencia ilegal, en cuyo caso el reo Gazca se halla comprendido en el artículo 2º, capítulo 1º de la ley ya enunciada.

Con respecto á los reos Francisco Serna y Donaciano Tovar, que compraran el papel que se extrajera del archivo de que se ha hecho mérito, existe contra ellos demostrada legalmente su criminalidad sobre la receptacion que cometieran, consistente en haber comprado una cosa que por sí misma llevaba inibita la procedencia ilícita, ya por ir amarrados los legajos, según aquellos lo han confesado, ya por la clase de personas que los vendieran, que por su posición no podrían ser dueños de ellos, y ya por las demás circunstancias que aparecen en la causa. Efectivamente consta que el C. Sixto Martínez dió aviso á Serna que los papeles que comprara eran de un Juzgado: el mismo Serna dió á Juan García, según lo declaró éste á fojas 76 vuelta, distintos tlacos falsos que el mismo reo partió, y que los quitó de las causas en que se hallaban agregados, cuyos antecedentes eran bastantes para que al menos hubiesen dado parte á la autoridad.

Existe contra Donaciano Tovar la invención en su poder de una cosa con procedencia ilícita, con la circunstancia que el mismo Félix Ramírez le sostuvo en careo haberle dado conocimiento de la procedencia de robo que traían los papeles; con cuyos antecedentes, los reos citados, es decir, Serna y Tovar, se les ha constituido convictos en el delito de receptacion, en razón del conocimiento del delito que les ministraban los mismos papeles, y en consecuencia, incluidos aquellos en el artículo 3º de la ley referida, y comprendidos en el artículo 4º, capítulo 1º de la misma, y en las fracciones 2ª y 4ª, artículo 3º de aquella.

Por todo lo expuesto, y con fundamento de la fracción 2ª, artículo 8º de la misma

ley, artículo 16, capítulo 2º y los demás fundamentos expresados, fallo:

Primero. Por delito de robo, se condena á Félix Ramírez á un año de prisión.

Segundo. Por complicidad en el mismo delito expresado, se condona á Jesus Gazca á ocho meses en el mismo destino, quedando obligados ambos reos á pagar los daños y perjuicios.

Tercero. Por delito de receptacion se condena á Francisco Serna y á Donaciano Tovar, á cuatro meses de prisión cada uno, y á pagar así mismo en la parte que les corresponde, los daños y perjuicios.

Y quedando revocada la sentencia que pronunció el Juez de Distrito de Guanajuato á 24 de Diciembre próximo pasado, ejecútese si hubiera conformidad, y remítase esta causa á la Suprema Corte de Justicia para su revision; y por cuanto consta la dedicacion absoluta que ha tenido el C. Promotor fiscal en los voluminosos expedientes del concurso de Laureles, se le encarga solo, cuide no dejar pasar en los suscritos en casos como el presente, los términos establecidos por la ley enunciada: búsquense en el archivo las constancias relativas á los expedientes de los CC. Rafael Villalobos, Pedro Santo administrador de Rentas de Silao, Antonio Marín, Lic. Antonio Tercero y José María Villa, tomándolos de los libros de entradas de la Secretaría de este Tribunal, lo cual conseguido, remítanse los antecedentes á los Juzgados de Distritos que correspondan, dándoles noticia del robo perpetrado, á efecto que den conocimiento al C. Promotor fiscal, para que promueva en su caso los derechos relativos á la Hacienda pública, ó citen á las partes para que en caso de tener derecho propio sin efectos á aquella, promuevan lo que corresponda si les pareciese conveniente.

El C. Magistrado de Circuito así lo decretó y firmó.—Doy fé.—*Aurelio Ramis Portugal*.—*Ramon Reynoso*.

Pedimento del C. Promotor fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

El C. Fiscal dice: que la presente causa fué instruida en el Juzgado de Distrito de Guanajuato, contra Félix Ramirez, Jesus Gazca, Donaciano Tovar y Francisco Serna, por el robo perpetrado en el archivo del Tribunal de Circuito de Celaya, de varios legajos en que se hallaban ya unos negocios concluidos, ya otros en tramitacion. Seguida la averiguacion hasta ponerla en estado de sentencia, fué fallada en 1ª instancia, condenando á Ramirez á un año de prision, á Gazca á ocho meses, y en cuanto á Tovar y á Serna, que se les absolvía del cargo.

Elevada la causa al Tribunal de Circuito, fué reformado el fallo anterior en cuanto á los expresados Serna y Tovar, condenándolos á cuatro meses de prision; y confirmado respecto de Ramirez y Gazca, los cuales se conformaron con la sentencia; mas los primeros suplicaron de ella.

Venida luego la causa á esta Sala, se mandó dar vista al C. Procurador general; mas este funcionario expresó en su pedimento de 21 de Marzo próximo pasado, que no era asunto de su resorte, sino de esta fiscalia, y por lo mismo que pasara al que suscribo; acordado de conformidad, el negocio pasó á este ministerio.

En su tramitacion, lo mismo que en la aplicacion de la pena, los tribunales inferiores tuvieron presente la ley de 5 de Enero de 1857, y con arreglo á ella fallaron. En efecto, es la que debe aplicarse, toda vez que se trate de un delito de robo ó de hurto.

Pues bien, esta ley en su tratado de procedimientos trae dos artículos que merecen se fije en ellos seriamente la atencion.

El uno es el 65, el cual dice á la letra: «Luego que el Tribunal Superior á quien corresponda, recibiere el proceso, y en la sentencia se advirtiere que la pena impuesta es de mas de dos años de prision, ó mas

de quinientos pesos por vía de multa ó responsabilidad civil, lo mandará pasar al Ministerio fiscal, para que dentro de tres dias pida lo que creyere justo.»

Este artículo, como se ve, previene al Tribunal de 2ª instancia pase la causa al fiscal por tres dias, si la pena impuesta en 1ª es de mas de dos años de prision, ó la responsabilidad civil se calculó en mas de quinientos pesos. El artículo siguiente y los demás hasta el 71, caminando bajo el mismo supuesto de la gravedad de la pena, marcan el procedimiento de la 2ª instancia ó sea la apelacion; mas ¿qué deberá hacerse, cuando la pena impuesta por el Juzgado inferior sea mucho menor de la determinada expresamente en el art. 65, y es lo que sucede en esta causa? Entonces es claro que no hay lugar á instruir una segunda instancia, sino solamente á una mera revision, conforme á lo dispuesto en el art. 62 de esa misma ley, y la que tiene lugar en los hurtos simples de que habla en su art. 57. Pero aun hay mas; el Juez de Distrito para imponer á Ramirez la pena de un año de prision, considera que está comprendido en el art. 52 y en la fraccion 4ª del 53. En virtud de esta disposicion, cuando en un hurto interviene abuso de confianza, y el valor de la cosa hurtada no llega á cien pesos, se castiga con el doble de la pena impuesta en el 52 que es de seis meses de prision. Respecto de Gazca pudiera hacerse un razonamiento análogo, puesto que la pena es menor de la impuesta á Ramirez, y aun con mucha mayor razon en lo relativo á Tovar y á Serna, á quienes en 1ª instancia se les dá por compurgados con el tiempo que hasta la fecha de esa sentencia habian sufrido de prision. Todo esto prueba, que la presente debió ser calificada entre las que se terminan con arreglo al art. 57 de la ley citada de 5 de Enero de 1857, y que se refiere al decreto de 22 de Julio de 1833. Así, pues, no debió haberse admitido la apelacion, ni sustanciándose la 2ª instancia en

los términos que lo hizo el Tribunal de Circuito de Celaya.

Pero aun mucho menos es de sustanciarse la 2ª instancia con la audiencia del Ministerio y del defensor de los encausados, toda vez que no es admisible ni el pedimento del uno, ni la defensa del otro. El art. 72 de la mencionada ley dice: «La revista de la causa se hará con solo lo actuado en ella, hasta la 2ª instancia inclusive, sin necesidad de repetir el pedimento fiscal, ni la defensa por escrito; excepto los casos extraordinarios en que á juicio del mismo Tribunal de 3ª instancia, sea necesario oír de nuevo al fiscal y las defensas de los reos, y aun las pruebas que el reo ó el acusador pretendieren hacer valer y que por derecho no puedan declararse. Dicha 3ª instancia deberá arreglarse en cuanto á trámites á lo prevenido para la 2ª».

Segun este artículo, basta para la revision de esta causa, lo actuado en la 2ª instancia, tanto mas, cuanto que el presente caso, en sentir del suscrito, no se haya comprendido en la excepcion que marca la ley en ese mismo artículo últimamente citado.

Por todo lo expuesto, el Fiscal es de opinion que esta sala puede muy bien, si lo haya por conveniente, proceder á la revision de la presente causa, en los términos que previene el art. 72 de la citada ley de 5 de Enero de 1857.

México, Mayo tres de mil ochocientos setenta y uno.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la causa instruida contra Félix Ramirez, Jesus Gazca, Donaciano Tovar y Francisco Serna, reo principal el primero,

y cómplices los otros del robo del archivo del Tribunal de Circuito de Celaya; las declaraciones de los acusados y de los testigos; los careos respectivos de unos y otros; la confesion con cargos de los primeros; lo pedido por el C. Promotor fiscal y alegado por éste y por los defensores de los acusados; la sentencia de 1ª instancia que condena á Ramirez á un año de prision, contado desde de la fecha en que se motivó y la á que sujetó á Gazca á ocho meses de la misma pena, contados desde que se lo declaró bien preso, y que absolvió del cargo á Tovar y Serna: vistas las diligencias practicadas en 2ª instancia con la sentencia pronunciada en ella, que condena á Ramirez y Gazca á la misma pena que se les impuso en 1ª instancia, quedando ambos reos obligados á pagar los daños y perjuicios; y que revocándola respecto de Tovar y Serna, los condena á cuatro meses de prision cada uno y á pagar así mismo en la parte que les corresponde, los daños y perjuicios; visto finalmente, lo pedido ante esta 1ª sala por los CC. Fiscal y Procurador general de la Nacion y lo alegado por el C. Lic. Manuel Olaguivel, defensor de Tovar y de Serna y teniendo presente todo lo que convino: considerando: que la sentencia de 2ª instancia ha causado ejecutoria respecto de Ramirez y de Gazca: que Cerna y Tovar fueron declarados bien presos, el primero el 25 y el segundo el 26 de Agosto de 1870: que la responsabilidad criminal que les resulta, es notoriamente menor que la que resulta á Gazca y Ramirez, y queda compurgada con lo que han padecido durante su prision; en atencion á lo expuesto respecto de ellos en la sentencia de 2ª instancia, y á que la pena en lo criminal, no libra de la responsabilidad civil. Se declara:

Primero: Que se há por revisada esta causa respecto de Félix Ramirez y de Jesus Gazca por ser conformes respecto de ellos las sentencias de 1ª y de 2ª instancia.

Segundo: Se confirma por sus propios

legales fundamentos la sentencia de 2ª instancia respecto de Donaciano Tovar y de Jesus Serna á quienes condena á cuatro meses de prision cada uno, los cuales se dan por compurgados con el tiempo que sufrieron de prision durante la 1ª instancia.

Quedan sujetos los expresados Ramirez, Gazca, Tovar y Serna á la responsabilidad civil en la parte que les corresponde.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de Oclaya con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafraqua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Azaa.*—*Luis Mª Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Mayo treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Gomez Eguarte.*

AMPARO.

Juicio promovido por Miguel Freyre ante el Juez de Distrito de Veracruz, por infraccion de garantías individuales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

«C. Juez de Distrito: el Promotor fiscal dice: que ha examinado detenidamente estas actuaciones sobre el juicio de proteccion y amparo que solicita el C. Juez de Paz 3º de esta II. Ciudad, con la consulta del C. Juez de 1ª instancia de Córdoba, Fructuoso Corona, que violan las garantías que le concede el art. 19 de la Constitucion Federal; y en ellos encuentra, que á consecuencia de habérsele mandando formar cau-

sa por sospechas de complicidad en el delito de falsedad cometido por el secretario del Juzgado de Paz del pueblo de Jamapa, C. Ramon Hermida, fué detenido el 15 de Octubre en la casa de detencion: que al tercer dia, es decir, el 18, presentó Freyre un escrito pidiendo su excarcelacion, por no haber en la causa mérito para que se decretara en su contra el auto motivado de prision, que la carta fundamental exige en todo procedimiento criminal en que el delito merezca pena corporal: que en el mismo dia fué mandado excarcelar; pero con la condicion de que presentara caucion promisorio de comparecer ante el Juzgado, siempre que fuese llamado: que de esa providencia apeló y le fué admitido el recurso, despues de haber procurado inútilmente que se revocara por contrario imperio, mandando el Juez sin embargo al alcaide que lo pusiera en libertad por acatamiento al art. 19 ya citado: que la II. sala de 2ª instancia, á quien se remitió la causa en grado, confirmó el auto apelado porque se tuvo sin duda en consideracion que la caucion promisorio exigida, no era para que volviera el procesado á la prision, sino para que se presentara al Juzgado como se desprende de los términos de la providencia apelada: que notificado el auto superior á Freyre, no se conformó, y despues de varios trámites corridos, pasó la causa al C. asesor nato de Córdoba y éste consultó el 11 de Noviembre que fuera detenido nuevamente el procesado y que acto continuo se le declarase formalmente preso, por los fundamentos que en su concepto ameritaban ambas providencias, segun los datos que la causa suministraba, sin tener presente que del 15 al 18 del mes de Octubre habia trascurrido el término constitucional de la detencion, y que no habiéndose decretado el mismo dia 18 en que fenecía el auto de bien preso motivado con los demás requisitos legales, se hacia responsable por su consulta de la infraccion del art. 19 y sus consecuencias: que el Juez 1º de Paz,